

Señores.

JUZGADO QUINTO (5º) ADMINISTRATIVO DE CALI, VALLE DEL CAUCA.

E. S. D.

REFERENCIA: **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**
PROCESO: REPARACIÓN DIRECTA
RADICADO: 76001-33-33-005-2020-00086-00.
DEMANDANTES: MARIO MURCIA POVEDA Y OTROS.
DEMANDADOS: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y OTRO.
LLAMADO EN GARANTÍA: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C. S. de la J., actuando en mi calidad de apoderado de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, mediante el presente escrito procedo a **REASUMIR** el poder a mi conferido en el proceso de la referencia, y a presentar dentro del término legal, los **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**; solicitando desde ya, se profiera sentencia favorable a los intereses de mi representada, negando las pretensiones de la demanda por no haberse demostrado la responsabilidad administrativa que se pretendía endilgar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI y a mi prohijada, con fundamento en los siguientes argumentos que concretaré en los acápites siguientes.

CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR ALEGATOS.

A través de auto No. 349 de fecha 28 de abril de 2025, notificado el 29 de abril de 2025, proferido por el JUZGADO QUINTO (5º) ADMINISTRATIVO DE CALI, VALLE DEL CAUCA se ordenó el termino conjunto de 10 días para que las partes presenten Alegatos de Merito en Primera instancia conforme a lo previsto por el artículo 181 del CPACA. En ese sentido, dicho término transcurrió los días 30 de abril, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 y **14 de mayo de 2025** (los días 01, 03, 04, 10, 11 de mayo no se cuentan por ser días no hábiles), por lo que se concluye que este escrito es presentado dentro del tiempo previsto para tal efecto.

CAPÍTULO II. ASPECTO PREVIOS RELATIVOS A LA “IMPUTACIÓN”.

Es importante precisar que el objeto del litigio aquí ventilado corresponde al fijado por el despacho en audiencia inicial, en los siguientes términos:

El litigio se circunscribe en determinar si hay lugar a declarar administrativamente responsable a las entidades demandadas, Distrito Especial de Santiago de Cali y las Empresas Municipales de Cali EMCALI - E.I.C.E E.S.P de los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales que aducen haber sufridos los demandantes, como consecuencias de las lesiones sufridas por el señor Mario Murcia Poveda en hechos ocurridos el pasado 4 de abril de 2018, mientras realizaba labores de pintura a la fachada del bien inmueble ubicado en la Calle 37 No. 40 a 86 del Barrio Antonio Nariño de esta ciudad, presuntamente al recibir una descarga eléctrica por las cercanías de las redes del alumbrado público y la inexistencia del material aislante, I hecho que se produjo al tocar de manera accidental los referidos cables con un rodillo de pintura, lo cual le ocasionó

quemaduras en su mano y pierna derecha.

Así mismo, se debe determinar la responsabilidad que les corresponde a las entidades llamadas en garantía, conforme a la póliza de seguro de responsabilidad correspondiente y a la entidad vinculada en calidad de litisconsorte.”¹

I. ALEGATOS DE MERITO FRENTE A LO PROBADO EN LA DEMANDA

1. SE ACREDITÓ LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Del análisis jurídico de los elementos fácticos, normativos y probatorio del presente caso, se concluye de manera categórica que el Distrito Especial de Santiago de Cali carece de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente proceso de responsabilidad extracontractual. Este alegato, de carácter sustancial, tiene la entidad suficiente para determinar la imposibilidad jurídica de atribuir responsabilidad al Distrito, en la medida en que no existe un vínculo material, ni legal, ni fáctico entre la entidad territorial y el hecho generador del presunto daño alegado por la parte actora.

La legitimación en la causa, tanto activa como pasiva, constituye uno de los presupuestos fundamentales del proceso judicial. Es el punto de partida para que un determinado litigio pueda desarrollarse válidamente y concluir en una decisión de fondo. Esta figura ha sido objeto de amplio desarrollo doctrinal y jurisprudencial, especialmente por parte del Consejo de Estado, que ha diferenciado entre la legitimación en la causa "de hecho" y la legitimación en la causa "por derecho sustancial" o "material", diferenciación que resulta cardinal en el presente caso. En efecto, la legitimación en la causa de hecho es aquella que se predica de las partes que figuran en el proceso y que han sido formalmente vinculadas a él, ya sea como demandantes o como demandadas. Supone un análisis desde el plano puramente procesal y tiene que ver con la posibilidad de intervenir en el proceso a partir de la afirmación de una relación jurídica con el objeto del litigio.

En contraste, la legitimación en la causa por derecho sustancial implica la existencia de una relación material entre la parte y los hechos que dieron lugar al proceso, de modo que dicha parte pueda ser considerada como titular del derecho invocado (en el caso del actor) o como sujeto jurídicamente responsable del hecho imputado (en el caso del demandado). Así lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por ejemplo, en la sentencia del 18 de mayo de 2017, Rad. 68001-23-33-000-2013-01574-01 (2161-16), M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, se sostuvo:

“(…) la legitimación material en la causa presupone la existencia de un interés jurídico entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar”.

En esta línea, la Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 28 de marzo de 2019, Rad. 05001-23-31-000-2003-01256-01 (63053), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, reiteró que:

¹ Acta de audiencia inicial No. 004 del 30 de abril de 2025 del proceso con radicado No. 76001-33-33-005-2020-00086-00.

“(…) tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado, y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial”.

En el caso concreto, la parte actora pretende imputar responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali por presuntos daños derivados de la prestación del servicio público de energía eléctrica, específicamente por la ocurrencia de un accidente con una red eléctrica. Sin embargo, de la lectura detallada de la demanda se constata que no existe una imputación directa y concreta que permita establecer una relación sustancial entre los hechos y el Distrito, más allá de una mención genérica y sin soporte fáctico o normativo.

Ahora bien, conforme al artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y corresponde a este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. No obstante, la prestación directa puede estar a cargo de entidades públicas, privadas o mixtas, conforme a lo que disponga la ley. Es en desarrollo de este mandato constitucional que el legislador expidió la Ley 142 de 1994, que regula el régimen de los servicios públicos domiciliarios. En efecto, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 dispone que la inspección, vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios públicos corresponde al Presidente de la República, quien la ejerce a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, órgano técnico y especializado que cuenta con autonomía administrativa y financiera. En el mismo sentido, el artículo 75 de esta norma señala expresamente que los municipios no tienen competencia para inspeccionar, vigilar ni controlar a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, salvo en lo relacionado con el otorgamiento de subsidios y la constitución de las empresas.

Por tanto, es claro que la función de inspección, vigilancia y control que la parte actora le atribuye al Distrito como supuesto generador de su omisión no le es legalmente exigible. El Distrito de Santiago de Cali no tiene la potestad legal ni fáctica de intervenir, corregir o sancionar la conducta de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. en su calidad de prestadora del servicio público de energía. Cualquier responsabilidad derivada del funcionamiento de las redes eléctricas corresponde a la empresa operadora, tal como lo establece el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, que obliga a las prestadoras a construir, operar y mantener sus redes e instalaciones.

En este punto, resulta pertinente recordar que EMCALI E.I.C.E. E.S.P. es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 34 de 1999, norma que en su artículo 1º le asigna, entre otros, el objeto de prestar los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica. En tal sentido, se trata de una entidad descentralizada, que goza de autonomía frente a la administración central del municipio.

El artículo 68 de la Ley 489 de 1998 es enfático al señalar que las empresas industriales y comerciales del Estado, aunque pueden estar adscritas a un ente territorial, no se subordinan jerárquicamente a este, ya que actúan bajo el principio de autonomía administrativa y financiera. Por tanto, no puede predicarse responsabilidad del Distrito por los hechos atribuibles a una entidad dotada de autonomía legal, funcional y patrimonial.

Ahora bien, desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual del Estado, es imperativo acreditar, de manera concurrente y probada, los tres elementos estructurales: el daño antijurídico, la imputación fáctica y jurídica a la entidad pública y la relación de causalidad entre la conducta del agente estatal y el daño. En el caso de autos, el segundo y el tercer elemento no se configuran respecto del Distrito de Santiago de Cali. No existe acto, hecho, omisión o participación alguna atribuible al ente territorial en los hechos que dieron lugar al presunto daño. Tampoco se acreditó una relación causal entre la conducta de la administración distrital y la ocurrencia del hecho. En efecto, ni en la demanda ni en el expediente se encuentra una sola prueba que demuestre que el Distrito tuvo conocimiento, control, administración, supervisión o intervención alguna en la red eléctrica cuya presunta falla dio lugar al daño alegado. La totalidad de los elementos del hecho generador del daño corresponde, según la propia narrativa de la demanda, a la operación técnica del servicio de energía eléctrica, cuya titularidad, operación y mantenimiento corresponde exclusivamente a EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

La jurisprudencia ha sido clara al respecto. En casos análogos, el Consejo de Estado ha precisado que no puede predicarse responsabilidad del municipio o distrito frente a hechos atribuibles a una empresa prestadora del servicio público de energía, aun si esta es del orden municipal, pues la descentralización administrativa implica una separación funcional y jurídica entre la administración central y la empresa industrial y comercial.

Así las cosas, se insiste: la demanda no contiene una imputación concreta de responsabilidad contra el Distrito de Santiago de Cali, ni tampoco existe prueba de que dicha entidad haya actuado u omitido actuar frente a los hechos que generaron el daño. Por el contrario, todas las circunstancias apuntan a que cualquier eventual responsabilidad debe ser determinada, exclusivamente, frente a EMCALI E.I.C.E. E.S.P., en su calidad de prestadora del servicio y titular de las redes involucradas. Máxime cuando esta E.S.P. cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. En conclusión, no existe legitimación material en la causa por pasiva del Distrito Especial de Santiago de Cali, razón por la cual resulta procedente declarar probado este alegato y, en consecuencia, desvincular al ente territorial del proceso, con la correspondiente denegación de las pretensiones en su contra.

2. SE ACREDITÓ LA CONFIGURACIÓN DEL HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA COMO CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

En el presente asunto, ha quedado plenamente demostrado que el hecho eléctrico ocurrido el 4 de abril de 2018 tuvo como causa exclusiva el comportamiento imprudente y negligente del señor Mario Murcia Poveda, sin que pueda imputarse responsabilidad alguna al Distrito Especial de Santiago de Cali, dado que no desplegó acción ni incurrió en omisión que hubiese contribuido, siquiera de forma indirecta, a la producción del daño alegado. Por consiguiente, se configura de manera clara y suficiente la causal eximente de responsabilidad conocida como el hecho exclusivo de la víctima, que excluye cualquier obligación indemnizatoria del extremo pasivo.

La prueba recaudada en el expediente permite establecer, sin ambigüedad, que el señor Murcia Poveda asumió por su cuenta y riesgo una conducta que alteró de forma significativa las condiciones de seguridad del inmueble de su propiedad. En efecto, decidió construir irregularmente un tercer y cuarto nivel en su vivienda, ubicada en la Calle 37 # 40-86, barrio Antonio Nariño, sin haber tramitado ni obtenido la correspondiente licencia urbanística ni acto de reconocimiento ante la autoridad competente. Esta situación quedó acreditada mediante la constancia expedida por la Curaduría Urbana Tres de Cali, fechada el 10 de abril de 2025, en la que se indica expresamente que no existe registro de solicitud ni otorgamiento de licencia para dicho predio. Tal como se evidencia:

Santiago de Cali, 10 de abril de 2025
VUR-1378-10/04/2025

Señora:

JESSIKA VASQUEZ M.

Oficial Mayor – Secretaria Ad Hoc.

JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI.

of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co;

Ciudad.

Referencia: Su oficio N° 111 del 9/04/2025 recibido en VUR 1378 del 10/04/2025. Medio de Control Reparación Directa propuesta por MARIO MURCIA POVEDA Y OTROS contra el DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI Y OTROS. Rad 760013333005202000008600.

Dando respuesta a su solicitud, es importante informarle que la arquitecta Ana Maria Becerra Mining se posesionó en el cargo de Curadora Urbana Tres de Cali a partir del 11 de enero de 2023, por lo anterior, se procedió a hacer la revisión en los archivos de los proyectos radicados dentro de su gestión y no se encontró indicios que se haya radicado, tramitado y/o expedida licencia urbanística o acto de reconocimiento o alguna otra actuación para el predio ubicado en la calle 37 # 40-86 en el barrio Antonio Nariño, precisándole que dicha función pública ha sido desempeñada por varios arquitectos y de conformidad con lo establecido en el artículo 204 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Económico.

La construcción ilegal no solo incumplió las normas urbanísticas, sino que alteró las condiciones de seguridad en relación con las redes eléctricas cercanas, al punto de reducir la distancia mínima exigida por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) entre dichas redes y las edificaciones. Particularmente, la edificación irregular incluyó una escalera en caracol que obligaba al propietario a circular en condiciones que requerían extremo cuidado, dada la cercanía con cables eléctricos de alta tensión. Pese a ello, el día del hecho el señor Mario Murcia Poveda se encontraba realizando labores de pintura manipulando un rodillo metálico, sin adoptar las más elementales medidas de seguridad para este tipo de actividad. Tal como lo admite la propia demanda, no portaba casco, guantes ni botas dieléctricas, arnés, gafas, ropa adecuada ni cinturón de seguridad, elementos todos exigibles en actividades que se desarrollen en cercanía a redes de energía eléctrica. La omisión absoluta de tales medidas evidencia una conducta marcadamente imprudente, que se aparta de los mínimos estándares de diligencia exigibles a cualquier persona que realiza una actividad riesgosa en un entorno no autorizado.

En este sentido, es necesario recordar que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el hecho exclusivo de la víctima es una de las causales que, por su carácter ajeno e imprevisible, rompe el nexo de imputación jurídica entre la administración pública y el daño alegado. La jurisprudencia ha señalado que:

“La causa extraña es la única eximente de responsabilidad que se admite cuando el daño es causado en el ejercicio de actividades peligrosas. (...) Entre esas causas extrañas está la otrora denominada culpa de la víctima, en la actualidad hecho de la víctima, (...) lo importante es que lo que haga la víctima, con independencia de su calificación, dolosa o culposa, sea determinante y exclusivo para la causación del daño”.²

Esta postura ha sido también respaldada por la doctrina, al señalar que cuando el actuar de la víctima resulta extraño, imprevisible e irresistible, el daño debe ser imputado exclusivamente a ella, incluso si el demandado fue el autor material del daño. En otras palabras, cuando el propio afectado genera la situación de riesgo y no adopta las medidas mínimas para evitar su materialización, no hay fundamento jurídico que permita trasladar la consecuencia lesiva a un tercero ajeno a los hechos. Aplicando estos principios al caso concreto, no hay duda de que fue la conducta autónoma e imprudente del señor Mario Murcia Poveda la que provocó el accidente, al decidir construir sin autorización y posteriormente ejecutar actividades de pintura en condiciones riesgosas, ignorando las advertencias de seguridad que razonablemente debía observar. La reducción de la distancia entre la edificación y las redes eléctricas fue una decisión voluntaria y no autorizada, ejecutada sin conocimiento técnico y al margen del ordenamiento jurídico, que interrumpió de forma directa las condiciones mínimas de seguridad exigidas por el RETIE.

A lo anterior se suma que, según consta en la demanda, el actor ejercía con habitualidad actividades como ebanistería, carpintería y pintura, lo que permite colegir que no se trataba de una persona ajena a este tipo de labores, sino que contaba con experiencia y conocimiento suficientes para advertir los riesgos de trabajar en cercanía de redes eléctricas. Sin embargo, optó por ignorar voluntariamente tales riesgos, lo cual refuerza el carácter imprudente y negligente de su actuación. No puede entonces pretenderse trasladar al Distrito de Santiago de Cali una responsabilidad que nunca le correspondió, ni desde el punto de vista fáctico ni jurídico. El ente territorial no intervino en la construcción, no autorizó la obra, no controlaba la distancia de las redes, ni estaba en capacidad legal o técnica de prevenir o detener la actuación privada del señor Murcia Poveda. En consecuencia, no existe nexo de imputación alguno entre la conducta del Distrito y el daño alegado.

Finalmente, cabe precisar que el expediente contiene evidencia objetiva de que la afectación a la distancia reglamentaria respecto de las redes eléctricas fue ocasionada por la edificación irregular promovida unilateralmente por el propietario del predio. Si dicha distancia fue infringida, no fue por negligencia de la administración distrital, sino por una conducta particular, independiente y jurídicamente reprochable del propio afectado, sin licencia, sin control y sin respeto por las normas técnicas.

En síntesis, el hecho que dio origen a esta controversia no fue atribuible a ninguna falla del servicio por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali, sino al actuar descuidado e ilegal del

² Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2017, rad. 05001-23-31-000-2003-01256-01, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

demandante. Su conducta constituyó la causa exclusiva y determinante del daño, por lo cual no es jurídicamente viable imponer una obligación indemnizatoria al Distrito, en tanto el daño no le es imputable desde el punto de vista jurídico. Por lo anterior, se solicita al despacho declarar probado este alegato de hecho exclusivo de la víctima y, en consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda, exonerando de toda responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali.

3. SE ACREDITÓ LA AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE ACREDITEN LA FALLA EN EL SERVICIO POR PARTE DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA Y EL DAÑO ALEGADO.

Del análisis probatorio efectuado en el presente proceso, se concluye con certeza que no existió una falla en el servicio atribuible al Distrito Especial de Santiago de Cali. Debido a que el hecho generador del daño, esto es, el hecho ocurrido el 4 de abril de 2018, no se produjo por una omisión o irregularidad imputable al ente territorial, sino por la conducta imprudente y negligente del señor Mario Murcia Poveda. Fue él quien, por decisión propia y sin observancia de la normativa urbanística ni eléctrica, construyó de forma irregular los niveles tercero y cuarto de su vivienda, disminuyendo peligrosamente la distancia con las redes eléctricas. Esta actuación, contraria a las normas técnicas del RETIE y realizada sin licencia alguna, fue la causa exclusiva del siniestro que dio lugar a las lesiones reclamadas.

La responsabilidad extracontractual del Estado, como lo ha reiterado la jurisprudencia de manera uniforme, solo puede estructurarse cuando concurren tres elementos esenciales: el daño, la imputabilidad al Estado y, de manera crucial, el nexo causal entre el hecho administrativo y el perjuicio alegado. Este último componente —el vínculo directo entre la conducta estatal y el daño— no fue acreditado por la parte actora, pese a ser su carga procesal.

El demandante no aportó prueba alguna que permitiera establecer de manera precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el accidente eléctrico, no existe en el expediente testigos presenciales que puedan corroborar lo señalado en la demanda, tampoco se allegaron elementos que permitieran acreditar que las redes eléctricas del sector presentaban deficiencias, fallas técnicas o una instalación irregular que se pretende endilgar al Distrito.

En materia de responsabilidad administrativa, la existencia del nexo causal no puede presumirse. Corresponde al demandante demostrar que el daño sufrido guarda una relación directa, cierta y verificable con una conducta omisiva o comisiva del ente público. En este caso, dicha carga probatoria no fue satisfecha. No solo no se aportaron medios de convicción que establecieran la conexión entre el accidente y una conducta del Distrito, sino que, por el contrario, el conjunto del material probatorio demuestra que el daño fue producto del hecho exclusivo de la víctima, figura jurídica que rompe el nexo causal e impide toda imputación al Estado.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado de manera reiterada que cuando se acredita que el hecho lesivo se generó por una causa extraña, y en especial por la conducta exclusiva de la víctima, no es posible atribuir responsabilidad al Estado, al haberse roto el hilo lógico que une la supuesta falla con el daño. Esa es precisamente la situación del *sub lite*, donde fue la actuación

temeraria del señor Mario Murcia Poveda, quien edificó sin autorización y manipuló un elemento metálico sin elementos de protección personal en una zona de riesgo eléctrico, la que generó el accidente.

En consecuencia, al no estar demostrada la existencia de un nexo causal entre un hecho atribuible al Distrito de Santiago de Cali y el daño alegado, no se configura la falla en el servicio. Jurídica y jurisprudencialmente, esta omisión probatoria impide declarar la responsabilidad del ente territorial. Por las razones anteriores, y con fundamento en el análisis probatorio, normativo y jurisprudencial expuesto, solicito se declare probado este alegato.

4. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS MORALES Y MATERIALES RECLAMADOS POR LA PARTE DEMANDANTE.

De acuerdo con el análisis jurídico y probatorio del caso, no es procedente acceder a las pretensiones indemnizatorias de la parte actora en lo relacionado con los perjuicios morales y materiales solicitados. Esta improcedencia se fundamenta en: (i) la acreditación de la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Especial de Santiago de Cali; (ii) la configuración de una causa extraña consistente en el hecho exclusivo de la víctima; (iii) la falta de prueba de los supuestos perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante; y (iv) la imposibilidad de reconocer perjuicios morales sin que se cumplan los presupuestos legales y jurisprudenciales para su procedencia.

A. Improcedencia de los perjuicios morales reclamados.

En lo que respecta a los perjuicios morales, la parte demandante solicita el reconocimiento de sumas indemnizatorias en favor del señor Mario Murcia Poveda, su nieto y su hijastra. Sin embargo, el reconocimiento de este tipo de perjuicios exige, como condición ineludible, que exista una conducta antijurídica atribuible al demandado, que haya generado un sufrimiento, aflicción o dolor psíquico en la víctima directa o en sus allegados, y que dicho daño sea probado o se configure dentro de los supuestos que permiten su presunción.

Frente a este punto, es necesario realizar las siguientes precisiones:

- 1. Víctima directa – Mario Murcia Poveda:** Si bien el dictamen de pérdida de capacidad laboral establece una afectación del 3.80%, esta calificación no alcanza siquiera el umbral mínimo para considerar una afectación significativa de su salud. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, dicha calificación solo permitiría —en condiciones normales y con acreditación del nexo de causalidad— una compensación de hasta 10 SMLMV, pero en este caso no se configura ni la responsabilidad del Distrito ni un daño de la magnitud que justifique tal reconocimiento.
- 2. Nieto de la víctima:** Aunque se admite que los nietos pueden integrar el segundo nivel de cercanía afectiva, lo cual permite en ocasiones una presunción de perjuicio moral, el monto máximo que jurisprudencialmente puede reconocerse en esos casos no excede los 5 SMLMV. Aun así, la presunción solo opera cuando se encuentra demostrada la responsabilidad del demandado, circunstancia que no se presenta en este caso.

3. **Hijastra del actor:** En relación con esta reclamante, la jurisprudencia es clara en señalar que no existe presunción de daño moral entre personas unidas por un vínculo de afinidad, como ocurre entre un padrastro y su hijastra. En consecuencia, para que pueda reconocerse este perjuicio, era necesario que la parte actora allegara elementos probatorios que demostraran un vínculo afectivo estrecho, así como la existencia del daño psíquico sufrido. Esta carga probatoria no fue cumplida, por lo cual no hay lugar al reconocimiento de perjuicio alguno.

En suma, el reconocimiento de perjuicios morales está sujeto a condiciones que no se verifican en el presente caso: no hay responsabilidad atribuible al ente territorial, no se acredita un daño significativo, ni existen pruebas que sustenten las afecciones alegadas. En consecuencia, debe rechazarse esta pretensión.

B. Improcedencia de reconocimiento del daño a la salud.

Debe señalarse que se ha acreditado la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Especial de Santiago de Cali, en tanto no ostenta la calidad de entidad prestadora del servicio público de energía eléctrica, el cual ha sido identificado por la parte demandante como el supuesto origen del daño alegado.

En consecuencia, no recae sobre el Distrito obligación alguna de indemnizar por los perjuicios derivados del accidente eléctrico ocurrido el 4 de abril de 2018, en el que se afirma resultó lesionado el señor Murcia. Así las cosas, resulta improcedente la solicitud de reparación por concepto de daño a la salud, en la cuantía solicitada, toda vez que no existe actuación ni omisión atribuible al ente territorial que permita establecer un nexo de responsabilidad frente al hecho dañoso.

C. Improcedencia del reconocimiento del perjuicio material – Lucro cesante.

Respecto del lucro cesante solicitado por el señor Ítalo Riascos Borrero, la parte actora pretende una suma de \$42.134.544, derivada de las presuntas limitaciones laborales que le habrían sobrevenido como consecuencia del accidente. Sin embargo, el expediente carece por completo de pruebas que acrediten: (i) la existencia de una relación laboral o actividad económica lícita previa al hecho; (ii) la cuantía exacta de los ingresos dejados de percibir; y (iii) la relación causal entre el daño y la supuesta pérdida económica. La jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019 (rad. 44572), eliminó la presunción de ingreso equivalente a un salario mínimo para las personas en edad productiva. A partir de esta decisión, el reconocimiento del lucro cesante exige una demostración estricta de la certeza del perjuicio, esto es, que el ingreso dejado de percibir haya existido realmente y no constituya una simple expectativa o conjetura. En palabras de la Corte Suprema de Justicia, solo son indemnizables los “perjuicios ciertos, reales y no puramente conjeturales”.

En el expediente no reposa contrato laboral, constancia de afiliación al sistema de seguridad social, declaraciones tributarias, estados de cuenta o cualquier otro medio probatorio idóneo que

demuestre que el señor Riascos desarrollaba una actividad productiva que le generara ingresos. Por lo tanto, no es posible determinar si dejó de percibir ingresos, cuánto dejó de percibir o durante cuánto tiempo, lo que hace inviable cualquier liquidación del lucro cesante, tanto consolidado como futuro.

La improcedencia de las pretensiones indemnizatorias presentadas por la parte demandante es evidente a la luz de los hechos, el derecho aplicable y el material probatorio disponible. La falta de legitimación del Distrito en la causa por pasiva, la configuración del hecho exclusivo de la víctima como causa eximente de responsabilidad, la ausencia de prueba del daño material y la improcedencia del daño moral conforme a los parámetros jurisprudenciales, llevan necesariamente a solicitar la denegación total de las pretensiones de la demanda.

Adicionalmente, de acuerdo con la información que reposa en el ADRES – Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el señor Mario Murcia Poveda se encontraba en el **régimen** – contributivo, pero como **BENEFICIARIO**. Tal y como se evidencia en la imagen adjunta:

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	16767513
NOMBRES	MARIO
APELLIDOS	MURCIA POVEDA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/02/2025	31/12/2999	BENEFICIARIO

Es decirde acuerdo a la información que reposa en el ADRES se logra deducir que el señor MARIO MURCIA POVEDA no se encontraba activo laboralmente, por lo que no le aplica la presunción de percibir un salario mínimo como lo ha establecido el Consejo de Estado, pues recordemos que este únicamente se aplica si la víctima acredita que desarrolla una actividad económica, de lo contrario (como surge en el caso en concreto) no habrá lugar a reconocer lucro cesante.

En consecuencia, se solicita respetuosamente declarar probado estos argumentos, así como negar el reconocimiento de los perjuicios reclamados en todas sus modalidades.

CAPÍTULO III. ANÁLISIS FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

1. NO SE CONFIGURÓ EL SINIESTRO POR AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO: NO OPERA LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA

. En el presente caso, no se ha demostrado la existencia de responsabilidad en cabeza del Municipio de Santiago de Cali, asegurado en la póliza No. 1501216001931, razón por la cual no se ha configurado el siniestro, ni ha nacido a la vida jurídica obligación alguna a cargo de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

El fundamento esencial del seguro de responsabilidad civil es la existencia de un hecho dañoso que sea atribuible al asegurado y que genere, conforme a la ley, la obligación de indemnizar. De conformidad con el artículo 1072 del Código de Comercio, el siniestro se entiende como la *realización del riesgo asegurado*, lo cual presupone no solo la ocurrencia de un daño, sino su imputabilidad al asegurado dentro del marco de responsabilidad establecido por la legislación colombiana. Este es, precisamente, el objeto de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, que según sus condiciones generales y particulares, cubre:

“Los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo perjuicios morales, daño a la vida en relación y lucro cesante, que cause a terceros el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con la Ley colombiana, durante el giro normal de sus actividades.”

En este orden de ideas, la cobertura de la póliza está condicionada a que el daño haya sido causado por una conducta activa u omisiva atribuible al asegurado, es decir, que exista responsabilidad conforme a la ley. En el presente proceso, esa condición no se ha cumplido, por varias razones jurídicas y probatorias, toda vez que no se acreditó una actuación irregular, deficiente o negligente atribuible al Municipio de Santiago de Cali que permita afirmar la existencia de una falla del servicio.

Por el contrario, el acervo probatorio demuestra que la administración actuó dentro del marco de sus competencias, sin que se advierta incumplimiento de sus deberes legales frente a la prestación del servicio público involucrado. Tampoco se ha probado que el hecho dañoso, se derive de una acción u omisión imputable al Municipio. Por el contrario, los elementos de prueba indican que el incidente, una electrocución producida por cercanía con redes eléctricas, obedeció exclusivamente a decisiones adoptadas por la propia víctima, quien construyó irregularmente un tercer y cuarto piso en su vivienda, así como una escalera en forma de caracol, disminuyendo con ello la distancia mínima exigida por la normativa técnica (RETIE) respecto de las redes eléctricas. Esta conducta no solo violó disposiciones técnicas de obligatorio cumplimiento, sino que además constituyó una conducta riesgosa deliberada, al manipular elementos metálicos como un rodillo en cercanía de la red eléctrica, sin tomar las precauciones mínimas exigidas en tales circunstancias.

Igualmente, no existe prueba alguna que permita establecer un nexo causal entre el comportamiento del asegurado y las lesiones sufridas por el demandante. El hecho dañoso no

puede ser jurídicamente imputado al Municipio, pues se trata de un evento que encuentra su causa exclusiva en la conducta de la víctima, lo que configura una causal eximente de responsabilidad, reconocida ampliamente por la jurisprudencia nacional.

En ese orden, si no hay hecho generador atribuible al asegurado, ni falla del servicio, ni nexo de causalidad, entonces no se ha realizado el riesgo asegurado tal como lo exige el Código de Comercio y lo define la propia póliza. En consecuencia, no se configura el siniestro que activa la obligación indemnizatoria del asegurador. Esto significa que la póliza No. 1501216001931 no puede ser afectada en modo alguno, ya que no ha operado la condición que haría exigible la prestación asegurada.

Así las cosas, la inexistencia de responsabilidad en cabeza del Municipio de Santiago de Cali, por ausencia de falla, inexistencia del hecho generador atribuible al asegurado, y falta de nexo causal, impide que se configure el siniestro. En consecuencia, no ha nacido obligación alguna a cargo de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., en virtud de la póliza de responsabilidad civil extracontractual invocada, por lo que cualquier pretensión que busque trasladar la carga indemnizatoria al asegurador carece de sustento legal y probatorio, y debe ser desestimada por su evidente improcedencia.

2. LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. SE LIMITA AL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL COASEGURO PACTADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1501216001931 – INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD.

Solo en gracia de discusión, de llegar a declararse alguna clase de responsabilidad patrimonial derivada del contrato de seguro suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali y las compañías aseguradoras intervinientes, es indispensable precisar que la obligación de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. no puede ser entendida en términos solidarios con las demás aseguradoras intervinientes. Por el contrario, dicha responsabilidad se encuentra limitada, exclusivamente, al porcentaje de participación asumido por mi representada en el marco del contrato de coaseguro, esto es, al 34% del riesgo asegurado. Esta limitación no es un criterio discrecional o unilateralmente invocado, sino una consecuencia jurídica necesaria del régimen legal que regula la figura del coaseguro, prevista expresamente en los artículos 1092, 1094 y 1095 del Código de Comercio.

La póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1501216001931 fue estructurada bajo la modalidad de coaseguro, una figura jurídica según la cual dos o más aseguradoras acuerdan cubrir conjuntamente un mismo riesgo, distribuyendo entre sí las obligaciones derivadas del contrato de seguro, de conformidad con los porcentajes convenidos. Esta modalidad es válida y está expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico colombiano, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos sustanciales. Tal como lo establece el artículo 1094 del Código de Comercio, para que exista un verdadero coaseguro deben concurrir: (i) pluralidad de aseguradoras; (ii) identidad del asegurado; (iii) identidad del interés asegurado; y (iv) identidad del riesgo cubierto. Estas condiciones se encuentran claramente satisfechas en el caso que nos ocupa.

Adicionalmente, el artículo 1095 del mismo estatuto indica que las normas sobre pluralidad de seguros son plenamente aplicables al coaseguro, lo que conlleva, entre otras consecuencias jurídicas, la ausencia de solidaridad entre los coaseguradores. Así lo establece expresamente el artículo 1092, según el cual cada asegurador debe responder frente al asegurado únicamente en proporción al monto asumido en el contrato, siempre que haya mediado buena fe.

De la revisión de la póliza de seguro en comento se desprende que **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.** actúa como coaseguradora líder, asumiendo un **34%** del valor asegurado total. Las demás aseguradoras participantes y sus porcentajes de compromiso son los siguientes:

Compañía Aseguradora	% de Participación
MAPFRE SEGUROS GENERALES	34.00%
ALLIANZ SEGUROS S.A.	23.00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS COLPATRIA	21.00%
QBE	22.00%

Esta distribución, acordada contractualmente y aceptada por el asegurado, implica que cada aseguradora responde autónomamente por la fracción de riesgo que decidió asumir, y que, en consecuencia, no existe una obligación conjunta ni solidaria frente al asegurado ni frente a terceros. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara y reiterada al precisar que, en materia de coaseguro, la regla general es la ausencia de solidaridad entre las aseguradoras. Cada una responde frente al asegurado en función de la participación que aceptó cubrir. En reciente decisión, el alto tribunal indicó:

“(…) En estos eventos, los distintos aseguradores deben responder con sujeción a la participación que asumieron al momento de la celebración del contrato, sin que exista solidaridad de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio. La jurisprudencia ha reconocido que en casos de coaseguro se responde en proporción a la cuantía que se asumió, sobre todo en el caso en que ello se pacte expresamente. De hecho, ha indicado que en casos de coaseguro <<el riesgo, entonces, es dividido en el número de coaseguradores que participan del contrato, en las proporciones que entre ellos dispongan, sin que se predique solidaridad entre ellos>>.”³

Esta regla se impone incluso en escenarios de llamamiento en garantía o eventual condena, de manera que la obligación de indemnizar, en caso de prosperar las pretensiones de la parte actora, deberá distribuirse de manera proporcional y no solidaria.

En virtud de todo lo anterior, debe resaltarse que la eventual obligación indemnizatoria derivada del siniestro cubierto por la póliza, en ningún caso puede imputarse a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. en una cuantía superior al 34% del total, ya que ese fue el porcentaje expresamente asumido por mi representada en el contrato de coaseguro. Cualquier decisión que implique imputarle a MAPFRE el 100% del riesgo, o una proporción superior a la

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de marzo de 2022, exp. 53742.

convenida, desconocería abiertamente lo pactado por las partes, las normas imperativas del Código de Comercio y el precedente jurisprudencial consolidado sobre la materia.

Finalmente, la figura del coaseguro implica una distribución clara y delimitada de riesgos entre varias aseguradoras, las cuales actúan de manera autónoma y no solidaria. En el presente caso, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. asumió el 34% del riesgo, y por tanto cualquier eventual condena solo podría cobijarla hasta ese límite, sin que sea jurídicamente procedente transferirle obligaciones que corresponden a las demás aseguradoras intervinientes. En consecuencia, se solicita se tenga en cuenta esta delimitación para efectos de cualquier eventual decisión condenatoria o de pronunciamiento frente al llamamiento en garantía.

3. LA RESPONSABILIDAD DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. DEBE LIMITARSE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL COASEGURO, DADO QUE NO EXISTE SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS.

Aun partiendo de una hipótesis meramente ilustrativa y sin aceptar responsabilidad alguna por parte de mi representada, es preciso advertir que la cobertura prevista en el contrato de seguro celebrado entre las partes está sujeta a límites expresamente pactados, tanto por evento como por vigencia de la póliza. Esta delimitación no solo corresponde a una regla técnica y actuarial propia del contrato de seguro, sino que se erige como una manifestación del principio de autonomía de la voluntad privada y del postulado pacta sunt servanda, que obliga a las partes a ceñirse al contenido del contrato.

En efecto, el contrato de seguro, como lo explica el doctrinante Fernando Ossa, contiene estipulaciones que no solo delimitan la extensión del riesgo asumido por el asegurador, sino que también regulan las relaciones entre las partes, el ejercicio de derechos, y las cargas que surgen del vínculo contractual. Estas condiciones, insertas en el clausulado general y particular, definen con precisión los eventos amparados, los montos máximos indemnizables, los riesgos excluidos y las reglas aplicables para el reconocimiento de cualquier reclamación.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 1079 del Código de Comercio, el asegurador únicamente está obligado a responder hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin que pueda exigírsele una prestación superior al valor previamente pactado. Así lo establece claramente la norma: *“Artículo 1079. El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074.”*

Este principio legal tiene plena aplicación al caso que nos ocupa. La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 1501216001931, identificada con el certificado No. 9, establece un límite máximo de cobertura por evento y por vigencia de \$5.000.000.000, correspondiente al amparo de “Predios, Labores y Operaciones”, tal como se detalla en su cuadro de coberturas:

COBERTURAS		VALOR ASEGURADO	
P.L.O.: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 5.000.000.000,00	\$	5.000.000.000,00
Responsabilidad Civil patronal	\$ 300.000.000,00	\$	750.000.000,00
Gastos medicos y hospitalarios	\$ 300.000.000,00	\$	1.100.000.000,00
Responsabilidad Civil parqueaderos	\$ 450.000.000,00	\$	900.000.000,00
Responsabilidad Civil para contratistas y subcontratistas	\$ 3.250.000.000,00	\$	3.500.000.000,00
Responsabilidad Civil Vehiculos propios y no propios	\$ 800.000.000,00	\$	1.350.000.000,00
Responsabilidad Civil productos	\$ 2.000.000.000,00	\$	2.000.000.000,00
Responsabilidad Civil cruzada	\$ 4.000.000.000,00	\$	4.000.000.000,00

Descripción del Amparo	Suma Asegurada
Predios, Labores y Operaciones	\$5.000.000.000

En consecuencia, cualquier eventual responsabilidad del asegurador se encuentra limitada a dicho monto, el cual representa el tope máximo de cobertura para todos los siniestros ocurridos dentro del período de vigencia de la póliza.

Es importante destacar que este valor asegurado no opera de manera ilimitada o acumulativa, sino que se reduce automáticamente con ocasión de los pagos que el asegurador haya efectuado por otros siniestros cubiertos dentro del mismo período de vigencia. Así, el monto disponible para responder en cada evento depende de los valores ya reconocidos o indemnizados, ya sea judicial o extrajudicialmente. Por lo tanto, en caso de que existan reclamaciones previas atendidas bajo la misma póliza, el valor remanente de la suma asegurada disminuirá proporcionalmente, y esa será la base real de la responsabilidad del asegurador. Esto implica que la indemnización exigible nunca podrá exceder el valor efectivamente disponible dentro del límite pactado contractualmente.

En suma, la póliza No. 1501216001931 contiene una cláusula expresa de limitación de responsabilidad que condiciona la obligación del asegurador al monto de la suma asegurada, conforme lo permite y exige el ordenamiento jurídico colombiano. Esta limitación, que forma parte esencial del contrato, debe ser observada estrictamente al momento de valorar la procedencia de cualquier reclamación y constituye un tope infranqueable para el reconocimiento de indemnizaciones. Todo lo anterior, naturalmente, sin perjuicio de los sublímites adicionales que se encuentren contemplados en el condicionado general de la póliza, los cuales podrían introducir restricciones adicionales en función del tipo de daño, actividad desarrollada, o categoría del riesgo cubierto.

4. EL DEDUCIBLE PACTADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL LIMITA LA OBLIGACIÓN DEL ASEGURADOR.

Incluso en el evento hipotético, no admitido, de que se reconociera algún tipo de cobertura en el marco de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1501216001931, es imprescindible tener en cuenta una condición esencial del contrato: el asegurado debe asumir una parte del valor del siniestro mediante el mecanismo del deducible, lo cual constituye una carga expresa pactada en la póliza y plenamente válida en el ordenamiento jurídico colombiano.

El deducible representa un mecanismo típico del contrato de seguro mediante el cual se establece que, ante la ocurrencia de un siniestro, el asegurador no responderá por la totalidad de la pérdida, sino únicamente a partir de cierto umbral económico, el cual deberá ser cubierto previamente por el asegurado. Este esquema de coparticipación busca generar una conciencia de corresponsabilidad y una conducta preventiva por parte del asegurado frente al manejo del riesgo amparado.

En el presente caso, la carátula de la póliza emitida por mi representada estipula expresamente lo siguiente:

- Límite asegurado por evento: \$5.000.000.000
- Deducible: 15% del valor de la pérdida, con un mínimo de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por evento.

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE	
P.L.O.: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00	15% PERD Min 40 (SMMLV)
Responsabilidad Civil patronal	\$ 300.000.000,00	\$ 750.000.000,00	15% PERD Min 40 (SMMLV)
Gastos medicos y hospitalarios	\$ 300.000.000,00	\$ 1.100.000.000,00	NO APLICA
Responsabilidad Civil parqueaderos	\$ 450.000.000,00	\$ 900.000.000,00	15% PERD Min 40 (SMMLV)
Responsabilidad Civil para contratistas y subcontratistas	\$ 3.250.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00	15% PERD Min 40 (SMMLV)
Responsabilidad Civil Vehiculos propios y no propios	\$ 800.000.000,00	\$ 1.350.000.000,00	15% PERD Min 40 (SMMLV)
Responsabilidad Civil productos	\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00	15% PERD Min 40 (SMMLV)
Responsabilidad Civil cruzada	\$ 4.000.000.000,00	\$ 4.000.000.000,00	15% PERD Min 40 (SMMLV)

Esto significa que el asegurado o beneficiario deberá asumir obligatoriamente el deducible antes de que la aseguradora reconozca cualquier monto indemnizatorio, siendo esta una condición previa y excluyente de toda obligación contractual.

La validez de esta figura ha sido ampliamente reconocida por la Superintendencia Financiera de Colombia. En el Concepto No. 2019098264 del 29 de agosto de 2019, dicha entidad explicó que:

“En una póliza donde se ampara la responsabilidad civil extracontractual, el monto de la indemnización puede verse disminuido si las partes han pactado que un porcentaje de la pérdida se asumirá a título de deducible por el asegurado, convenio que resulta legalmente viable de acuerdo con nuestro ordenamiento mercantil.”

De igual forma, el artículo 1103 del Código de Comercio contempla expresamente la posibilidad de que en los seguros de daños se pacten cláusulas especiales que impongan al asegurado asumir una cuota del riesgo o de la pérdida. Estas disposiciones se traducen en que, cuando existe un deducible estipulado, el asegurador no está obligado a indemnizar la totalidad del daño, sino solo el valor restante una vez se descuenta la parte correspondiente al asegurado. Esta suma puede fijarse como un porcentaje, una cifra absoluta o una combinación de ambos, y su presencia en el contrato tiene plena eficacia jurídica.

En atención a lo anterior, aun si se llegase a considerar procedente el llamamiento en garantía —lo cual se rechaza expresamente—, deberán aplicarse todas y cada una de las condiciones pactadas en el contrato de seguro, incluyendo, por supuesto, el deducible del 15% con mínimo de 40 SMMLV, que es parte esencial del acuerdo de voluntades. Esta condición contractual, además de ser legal y válida, tiene efectos directos sobre el monto que, en su momento, podría llegar a ser reconocido por la aseguradora. La suma a pagar, de darse el caso, deberá calcularse descontando previamente el deducible pactado, conforme al principio de legalidad del contrato y a lo previsto en los artículos

1077 y 1103 del Código de Comercio.

Solicito respetuosamente al Despacho que, al analizar la existencia y alcance de cualquier posible obligación del asegurador, tenga en cuenta la existencia del deducible pactado, el cual representa una condición esencial del contrato de seguro. Cualquier cálculo indemnizatorio deberá respetar los términos convenidos por las partes, en cumplimiento del principio pacta sunt servanda y la normatividad que rige los seguros de daños en Colombia.

5. RIEGOS EXLUIDOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN EL CONTRATO DE SEGURO.

Las exclusiones son límites a la responsabilidad del asegurado, pactadas por las partes en el contrato de seguro cuya función es armonizar las cargas económicas del contrato, que recaen sobre amparos. Por lo tanto, de verificarse dentro del proceso la existencia de una exclusión o limitación a la responsabilidad del asegurado respecto la póliza de responsabilidad civil extracontractual no. No. 1501216001931, deberá el Despacho abstenerse de imponer condena en contra de mi representada y declarar probada la exclusión en la sentencia proferida. Lo anterior en virtud al artículo 187 del CPACA.

El mismo efecto tendrá si se logra demostrar dentro del proceso el incumplimiento de la entidad asegurada de las obligaciones contractuales contenidas en las condiciones particulares y generales del contrato de seguro.

6. EL CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DE LOS CONTRATOS DE SEGURO.

El contrato de seguro de daños se rige por el principio de indemnizatoriedad, según el cual su finalidad no es generar lucro para el asegurado, sino resarcir el perjuicio efectivamente sufrido, dentro de los límites pactados contractualmente. Este carácter ha sido reiterado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Sent. 22 de julio de 1999, Exp. 5065) y se encuentra consagrado en el artículo 1088 del Código de Comercio.

En el presente caso, las pretensiones indemnizatorias formuladas por la parte actora resultan jurídicamente improcedentes, por cuanto desconocen la naturaleza indemnizatoria del contrato de seguro y podrían dar lugar a un enriquecimiento sin causa. Ello se agrava ante la ausencia de prueba que acredite la responsabilidad del ente asegurado (DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI) en la ocurrencia del daño alegado, incumpléndose así la carga probatoria que le corresponde al demandante en los términos del ordenamiento procesal. Por consiguiente, debe declararse probada la excepción de improcedencia de la reclamación por desconocimiento del principio de indemnizatoriedad y denegarse cualquier condena que pretenda exceder el límite asegurado o derivarse de una responsabilidad no acreditada.

6. EL PAGO AL QUE REMOTAMENTE SEA CONDENADA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DEBERÁ EFECTUARSE POR REEMBOLSO.

En el evento extraordinario e hipotético en que se profiera una sentencia condenatoria y se

determine la aplicación del contrato de seguro, es importante precisar que la obligación de la compañía aseguradora no se configura de manera directa frente al tercero demandante, sino a través del mecanismo del reembolso. Esta modalidad se deriva del hecho de que el Municipio de Santiago de Cali ostenta la calidad de tomador de la póliza, lo que implica que la aseguradora únicamente estará obligada a resarcir al asegurado una vez este haya satisfecho la obligación impuesta por la decisión judicial.

Por tanto, aun en ausencia de una aceptación de responsabilidad por parte del asegurado, y sin perjuicio de los argumentos previamente expuestos, debe resaltarse que la operancia del seguro exige, como condición previa, el pago efectivo por parte del Municipio a los demandantes. Solo a partir de dicho desembolso se configura la obligación del asegurador de efectuar el reembolso correspondiente, con estricta sujeción a las condiciones pactadas en el contrato de seguro.

En particular, dicho reembolso estará limitado por los términos del contrato, especialmente el límite máximo asegurado y el porcentaje de participación por coaseguro, según lo estipulado en la póliza vigente. Así, la intervención de la aseguradora se encuentra reglada no solo por el cumplimiento de la prestación por parte del asegurado, sino también por las estipulaciones contractuales que condicionan la cuantía y forma de la indemnización.

CAPÍTULO IV. PETICIÓN

En mérito de lo expuesto, de manera respetuosa, ruego:

PRIMERO: Negar todas y cada una de las pretensiones de la demanda, declarando probadas las excepciones de fondo y mérito presentadas por **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI** y en consecuencia se absuelva a mi representada a pago alguno por conceptos de indemnizaciones por los supuestos perjuicios alegados.

SEGUNDO: En el remoto evento en que los argumentos esbozados en el presente escrito no fueran de su convencimiento, no pierda de vista las limitaciones, deducible, coaseguro y exclusiones sobre la cobertura de la póliza con fundamento en la cual el **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI** llamó en garantía a mi representada, esto, de conformidad con las consideraciones expuestas por mi defendida en esta oportunidad procesal.

CAPÍTULO V. NOTIFICACIONES

Al suscrito, en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 oficina 212 de la Ciudad de Cali (V), correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,


GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.